

En Santiago, a nueve de febrero del año dos mil veintiuno

Vistos,

Que, a folio 1 comparece doña **DANIELA ALEJANDRA RAMOS VALENZUELA**, cédula de identidad N°17.584.495-3, domiciliada en Monjitas N°527, oficina N°1006, comuna de Santiago, Región Metropolitana; y deduce demanda de despido improcedente y cobro de prestaciones laborales en procedimiento monitorio en contra de **COMERCIALIZADORA S.A.** sociedad del giro del “*retail*”, rol único tributario número 81.675.600-6, representada legalmente por don **IVAN MARCO CONTRERAS MIRANDA**, cédula de identidad N° 6.491.215-1, ambos domiciliados en Moneda N°970, piso 4, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Funda su demanda en que ingresó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia con fecha 01 de junio de 2011, desempeñándose hasta la fecha de su despido en el cargo “apoyo integral tienda J45” (consistente en ser asistente de ventas). Señala que percibía una renta, para efectos del art. 172 del Código del Trabajo de \$568.931 (Quinientos sesenta y ocho mil novecientos treinta y un pesos). Alega haber sido despedida el día 14 de agosto del año 2020, por la causal del art. 161 inciso primero del Código del Trabajo. Posterior a ello suscribió – con reserva de derechos- un finiquito el día 28 de agosto del mismo año, donde recibió pago de indemnización por años de servicios, falta de aviso previo y otras prestaciones, a lo que fue descontado el aporte del empleador al seguro de cesantía.

Alega que el despido es improcedente, ya que la carta de despido que se le envió es genérica, utilizada para todos los trabajadores del grupo “Hites” al que la empresa pertenece, y dicha carta hace referencia a la “emergencia sanitaria nacional e internación por SARS-Cov-2”. Sostiene que la carta relata hechos relativos a la crisis social y la pandemia que habrían afectado a la empresa económicamente, lo que la habría llevado a suprimir el puesto de trabajo de la demandante. Sostiene que, sin perjuicio de lo señalado, la demandada ha realizado ofertas de trabajo por puestos similares, además de obviar en la carta de despido sus positivos resultados de venta a través de medios electrónicos, que no son mencionados en la carta de despido.



En cuanto al fondo de la causal invocada, señala que no se indica en la carta de despido cuales son los ajustes y reestructuraciones que necesariamente debió realizar la demandada para sobrellevar los problemas económicos que alega, y como ello incide en el caso concreto de la demandante. Por lo anterior sostiene que dicha carta adolece de la requerida especificidad. En virtud de lo anterior solicita la declaración de improcedencia del despido, y que en consecuencia se le pague el recargo del 30% de acuerdo con el art. 168 del Código del Trabajo, y la devolución del descuento efectuado por concepto de aporte del empleador al seguro de cesantía, con reajustes y costas.

A folio 7 consta resolución que acogió la demanda monitoria.

A folio 9 consta la respectiva reclamación realizada por la demandada, en virtud de la cual se citó a audiencia única, la que consta a folio 75.

En dicha audiencia la demandada contestó verbalmente la demanda, señalando en primer lugar reconociendo la relación laboral, la fecha de inicio y la función desempeñada. Asimismo, la remuneración, fecha de despido, causal de despido y firma de finiquito señalados en la demanda. Sin perjuicio de lo anterior señala que se le pagaron todas las prestaciones que correspondían en derecho. En cuanto a la carta de despido, sostiene que existieron dos motivos en la carta de despido, la crisis social y la pandemia, cuestiones que no han mejorado, como señala que afirma la demandante en su libelo. Tampoco es verdad que las restricciones de desplazamiento han permitido mejorar la situación del comercio, lo que afecta precisamente a la demandada., al no tratarse de comercio considerado como esencial.

En cuanto a la falta de consideración de las ganancias de ventas por internet, en la carta de despido si se consideran, ya que las bajas de ventas señalada en la misma son globales, considerando la venta presencial, telefónica y por vía electrónica. No es posible solo considerar las ganancias virtuales. Agrega que el local donde desempeñaba sus funciones la demandada hoy se encuentra cerrado debido a cuarentena conforme al plan paso a paso.

En cuanto a la falta de señalamiento en la carta de las medidas que tomo la empresa, alega que la exigencia de la actora es una extralimitación que no considera el legislador. En



lo relativo a la supuesta recuperación del “*retail*”, no es efectivo, y tampoco incide en la causa, ya que la causal de despido fue considerada objetivamente a la fecha del despido, y no sobre proyecciones futuras como la hecha por la demandante sin ningún fundamento.

El despido se realizó con todas las formalidades legales, y dando pago a todas las indemnizaciones correspondientes. No es efectivo que se buscara o contratara nuevos trabajadores para el puesto de la demandante, ya que se mantiene la planta de personal existente al momento del despido, puesto que el área en que ella se desempeñaba no ha sufrido cambios.

Finalmente, considera que el descuento del aporte del empleador a la AFC es procedente de acuerdo con lo preceptuado por el art. 13 de la ley N°19.728, de lo contrario existiría un doble pago a la demandante. Por lo anterior solicita el rechazo de la demanda con condena en costas.

Llamadas las partes a conciliación esta no se produjo, al existir un desacuerdo en el monto solicitado por la demandante y ofrecido por la demandada. En virtud de lo anterior se recibió la causa a prueba, incorporándose en el acto la prueba de las partes.

Considerando,

Primero: Que, la demandante dedujo demanda en procedimiento monitorio por despido improcedente y cobro de prestaciones laborales en contra de la demandada, fundado en que la causal invocada no es efectiva, y no se encuentra suficientemente justificada en la respectiva carta de despido, ya que la empresa demandada no se encuentra en una crisis económica de la magnitud alegada. La demandada contestó negando los hechos afirmados por la demandante relativa a una recuperación económica de su sector, y señalando que la causal se encuentra debidamente justificada de acuerdo a los hechos contenidos en la carta.

Segundo: Que, se fijaron como hechos pacíficos los siguientes: 1) Existencia de relación laboral 2) Fecha de inicio, 01 de julio de 2011 y termino 14 de agosto de 2020 3) Causal invocada para el despido, causal contemplada en el artículo 161 inciso 1° del Código del trabajo, esto es, necesidades de la empresa 4) Monto de la remuneración de la



demandante, ascendente a \$568.391 5) Monto del descuento por aporte a la aseguradora del Fondo de cesantía, por \$832.216 efectuado en el finiquito.

Tercero: Que, se fijó como hecho a probar la procedencia del despido por la causal invoca. Hechos y circunstancias que lo configuran.

Cuarto: Que, las partes con el objetivo de acreditar sus pretensiones rindieron la siguiente prueba:

A) Parte demandada:

a. Documental

1. Copia contrato de trabajo de fecha 06 de junio de 2011 entre COMERCIALIZADORA S.A y doña DANIELA ALEJANDRA RAMOS VALENZUELA para funciones de CONTROL PROBADORES.
2. Copia de contrato de trabajo de fecha 01 de junio de 2018 entre COMERCIALIZADORA S.A y doña DANIELA ALEJANDRA RAMOS VALENZUELA para funciones de APOYO INTEGRAL TIENDA J45.
3. Copia carta de despido de fecha 14 de agosto de 2020.
4. Copia correo electrónico entre doña Sara Villarroel Carrasco, fiscalizadora de terreno de la Inspección del Trabajo de Temuco y don Ricardo Vera Isla, Coordinador de Recursos Humanos Temuco, respecto de fiscalización realizada en torno a la suspensión de trabajadores.
5. Certificado ventas brutas de Hites Temuco, tienda en la cual se desempeñaba la trabajadora, comparativo año 2019-2020.
6. Copia de nómina de desvinculados desde el 18 de octubre de 2019 actualizada hasta el 20 de octubre de 2020.



7. Copia de ventas brutas tiendas Talca y Coquimbo de octubre de 2019 a julio de 2020.
8. Copia de artículo diario La Tercera, titulado “El retail mediano, en su peor momento”, de fecha 25 de agosto de 2020.
9. Copia de informe emitido por ICR Chile, que da cuenta del cambio de clasificación de solvencia de empresas Hites S.A. desde BBB+/negativa a BBB/negativa fundado en una contracción en la demandada, el cual previo incluso a la crisis social venía disminuyendo, el cual no se estima recuperarse en todo el 2020, disponible en <https://www.icrchile.cl/>
10. Copia de documento denominada “Reporte de Incidente SSC.” que da cuenta de los daños sufridos por la tienda Hites Alameda 757, el 28 de octubre de 2019, el cual detalla los daños sufridos y las reparaciones efectuadas.
11. Copia de noticia titulada “Incluido gerente: Hites despide a un centenar de altos ejecutivos ante necesidad de ahorro”, publicado por Bio Bio Chile, disponible en www.biobiochile.cl
12. Set de copias de Presentaciones de Power Point respecto a:
 - a. Informe estado de tiendas, de empresas Hites, de fecha 11 de noviembre de 2019, en la cual se detalle los daños sufridos a las diversas tiendas.
 - b. Detalle de la baja de venta que han experimentado las diversas sucursales, posterior al 18 de octubre de 2019.
 - c. Informe división sucursales. Situación tienda octubre, de empresas Hites, en la cual se detalle los daños sufridos y situación de las diversas tiendas en el mes de octubre de 2019.
 - d. Informe Chile en crisis. Estallido social 2019, en donde se da cuenta de la situación de crisis social del país, en la cual se expone un análisis de la prensa local y los informes de daños y disturbios a lo largo del país, correspondiente al mes de octubre.



13. Set de Copias de 106 fotografías que dan cuenta de los daños, saqueos, baja afluencia de público y reparaciones, que ha sufrido las diversas tiendas tanto en Santiago como en Concepción, Valparaíso y Talca.
14. Copia de Libros de Venta de todas las tiendas Empresas Hites, correspondiente al periodo entre el 1 de julio de 2018 al 30 de noviembre de 2018 y el período comprendido entre 1 de julio de 2019 al 30 de noviembre de 2019, en donde se evidencia la baja sostenida de las ventas de mi mandante.
15. Copia de Tabla Dinámica Excel en el cual se detalla, por tienda, las pérdidas que ha sufrido cada una de ellas y los gastos en que se debió incurrir.
16. Set de copias de 121 cartas de términos de relación laboral emitidas por Comercializadora a trabajadores, que da cuenta del proceso masivo de desvinculación, posterior al 18 de octubre de 2019, durante el mes de noviembre de 2020.
17. Set de copias de 6 libros de remuneración correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, y del periodo comprendido entre octubre, noviembre y diciembre de 2019, en donde se da cuenta en el comparativa del impacto económico negativo que ha experimentado empresas Hites S.A. a causa de la crisis social y la baja de su dotación.
18. Copia de carta de aviso de término de contrato de arrendamiento de fecha 27 de julio de 2020, respecto a quinto piso edificio Santo Domingo
979, Santiago.
19. Copia de certificado del Secretario del Directorio de Empresas Hites S.A., respecto a sesión N°319 de fecha 25 de junio de 2020, firmado por Eduardo Rodríguez Pérez.



20. Copia de Estados Financieros Consolidados Intermedios al 30 de junio de 2020, de Inversiones y Tarjetas S.A. y Subsidiarias.
21. Copia de Estados Financieros Consolidados Intermedios al 30 de junio de 2020, de Empresas Hites S.A. y Subsidiarias.
22. Copia de Estados Financieros Consolidados Intermedios al 31 de marzo de 2020, de Empresas Hites S.A. y Subsidiarias.
23. Copia de Artículo de prensa publicado con fecha 18 de marzo de 2020, “Ministro de Economía anuncia cierre de todos los centros comerciales del país”.
24. Copia de Artículo de prensa publicado en La Tercera con fecha 2 de abril de 2020 “Los números de los retailer medianos post 18-O y previo a la crisis del coronavirus”.
25. Copia de Artículo de prensa “Las últimas Noticias” de 26 de junio de 2020, “Calzado y vestuario lideran derrumbe en el comercio”.
26. Copia de Artículo de prensa www.pulso.cl de 29 de junio de 2020, “Compras con tarjeta no muestran señal de recuperación y siguen en bajos niveles”.
27. Copia de Artículo de prensa Diario Financiero de fecha 30 de junio de 2020 “Se cumplen los peores pronósticos del comercio y ya se prevén miles de despidos adicionales”.
28. Copia de Declaración Mensual y Pago simultáneo de Impuestos Formulario 29, Sociedad Comercializadora S.A. S.I.I., enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre del año 2019.
29. Copia de Declaración Mensual y Pago simultáneo de Impuestos Formulario 29, Sociedad Comercializadora S.A. S.I.I., enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2020.



30. Copia de Carta desistimiento de proyecto arrendamiento CD para Hites, Megacentro Buenaventura de fecha 30 de julio de 2020.
31. Copia de Certificado emitido por el Secretario del Directorio de Empresas Hites S.A., Eduardo Rodríguez Pérez.
32. Copia de Escritura de Modificación y reestructuración, contrato de financiamiento, reprogramación y redenominación, Itaú Corpbanca y Banco Consorcio con Hites S.A. de fecha 24 de abril de 2019.
33. Copia de Escritura Pública complementaria de contrato de emisión de bonos desmaterializados por línea de títulos de deuda a 10 años celebrada entre Empresas Hites S.A. y Banco de Chile otorgada con fecha 13 de agosto de 2015 en la Notaría de Santiago de don Víctor Olguín.
34. Copia de Oficio electrónico N° 5872 de 25 de febrero de 2019 de la Comisión para el Mercado Financiero.
35. Copia de Anexos N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5, escritura complementaria de contrato de emisión de bonos, desmaterializados por línea de títulos de deuda a 10 años, Notaría María Soledad Santos, de fecha 1 de febrero de 2019.
36. Copia de Archivo que contiene 135 cartas de despido a trabajadores de Sociedad Comercializadora S.A. por la causal de necesidades de la empresa, sus respectivos finiquitos enviados desde el 18 de octubre de 2019 a 20 de enero de 2020.
37. Copia de Archivo que contiene 209 cartas de despido a trabajadores de Sociedad Comercializadora S.A. por la causal de necesidades de la empresa, sus respectivos finiquitos enviadas con posterioridad al 20 de enero de 2020.



38. Nómina de empresas con solicitudes aprobadas de suspensión de contrato actualizada al 07 de agosto de 2020, donde se menciona a la empresa demandada.

39. Set de copias de Libros de remuneraciones desde enero a octubre de 2020, respecto a Comercializadora S.A

40. Testimonial:

1. Gonzalo Morales Ojeda, cédula de identidad N°15.390.399-3.
Declara saber que el juicio se enmarca en la reestructuración generada en la empresa producto del estallido social y la pandemia. Señala que le consta dicha situación porque es el jefe de seguimiento y control, ve los reportes que se generan de las ventas, márgenes e informes, manejando dicha información. Consultado acerca de que información arrojan estos reportes señala la existencia de una caída, debido a que no tenían claro que tiendas podían atender y cuáles no, lo que generó una difícil situación en la empresa. Por lo anterior debieron adoptar un modelo mixto de funcionamiento, cerrando las sucursales donde había cuarentena. Señala que hoy en día tienen 11 tiendas cerradas, funcionando solo 3 de lunes a domingo y el resto de lunes a viernes. Indica la existencia de bajas a partir del mes de noviembre del 2019 en las ventas. En cuanto al momento actual de la compañía, señala que tienen 3 grandes pilares, venta de vestuario, uso de tarjeta y venta de “deco” y “electro”. Sostiene que la venta presencial de vestuario ahora es de un 20% del total de ingresos de la compañía, y antes era de 50%. Señala que la participación de “electro” ha aumentado, con menos márgenes de ganancia para la compañía. En cuanto al uso de



la tarjeta señala que esta ha bajado a un 30%. Consultado acerca de qué área pertenecía la trabajadora señala que vestuario infantil. Contrainterrogado, se le consulta sobre el plan de reestructuración que tenía la empresa producto de las bajas en las ventas presenciales. Señala que este plan se fijó en abril de 2020 y se trataba de un ajuste en la dotación de las tiendas. Consultado acerca de si antes del plan se hizo algo, señala que solo decisiones puntuales en algunas tiendas. Consultado acerca de si se despidió gente antes de abril, señala que sí. Consultado acerca de la escrituración del plan de reestructuración, señala que desconoce si conta en un documento, pero que debería estar por escrito. En cuanto a la afectación por pandemia y estallido social, señala que la tienda cerro por ambos motivos por determinados periodos. En cuanto a la compañía, señala que todas las tiendas son administradas por Comercializadora S.A. pero que ellos lo ven como una sola gran empresa, Hites.

2. Ricardo Vera Isla, cédula de identidad N°11.968.857-4. Coordinador de recursos humanos de la sucursal de Temuco. Señala conocer a la demandante y que fue desvinculada el 14 de agosto de 2020 por necesidades de la empresa. Señala que se trató de una reestructuración nacional de la compañía debido a la pandemia, para bajar la dotación de personal por temas económicos de la compañía. Señala que en la sucursal de Temuco pasaron de tener 140 personas contratadas el año 2019 a 107 el día de hoy. Consultado acerca de que cambios hubo con el plan de reestructuración, señala que entiende por lo que ha escuchado, que se bajó la dotación a nivel nacional. Contrainterrogado acerca de si la reducción de la dotación tuvo por objeto reducir los costos de la empresa, señala que sí. En cuanto a su función señala que debe mantener los



contratos del personal, los beneficios e informar desvinculaciones, entre otras funciones. Señala que el no tomo la decisión, sino que se le informó de gerencia, a través de videoconferencia. Consultado acerca de la existencia de un plan de reestructuración escrito, señala que desconoce su existencia, pero cree que existe. Consultado acerca del estado de la tienda señala que hoy está en cuarentena, y que no existe la posibilidad de apertura para entrega en tienda y venta online.

3. Sergio Barrantes Fernández, cédula de identidad N°16.026.740-2. Señala que las necesidades de la empresa se deben a las bajas de venta producto del estallido social de 2019, y que cuando la situación se estaba normalizando comenzó la pandemia en marzo de 2020. En esa fecha señala que comenzó una reestructuración ya que no se podía sostener el nivel de gasto, bajándose el personal a nivel país, comenzando en abril. Consultado sobre qué consistió la reestructuración, señala que se trata de despido de trabajadores por necesidades de la empresa. Señala que las expectativas se mantienen bajas, y no se ha recontratado personal, manteniéndose la dotación rebajada en las tiendas. Consultada acerca de si se ha buscado personal para el cargo de la demandante afirma que no. Contrainterrogado respecto a en que consiste el plan de reestructuración, afirma que se trata de bajar la dotación de las tiendas, debido a la baja de clientes. Consultado acerca de quien toma las decisiones de reestructuración señala que la gerencia, pero que al se lo comunicaron verbalmente. Consultado acerca de cómo se elige quien se despide, señala que cada área decide a quien desvincular, que es por grupo de trabajadores y que en este caso decide el gerente de tienda. Consultado acerca de si la



empresa sigue vendiendo a través de internet, señala que sí, peor que es solo el 10% de la venta total, lo que no alcanzaría a cubrir las pérdidas generadas por la venta presencial.

B) Parte demandante:

a. Documental:

1. Carta de despido de la actora
2. Finiquito de trabajo de la demandante
3. 3 páginas de ofertas de empleo empresas de la página web Computrabajo.cl
4. Correo electrónico de fecha 07 de noviembre de 2020, asunto 10 nuevas ofertas de trabajo.
5. Correo electrónico de fecha 26 de noviembre de 2020, asunto 10 nuevas ofertas de Trabajo
6. Correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2020, asunto 10 nuevas ofertas de trabajo.
7. Impresión de pantalla, página web La Tercera, noticia “El 70% de las empresas de retail ha visto aumentar sus ventas por internet”.
8. Impresión de pantalla, página web diario de Concepción, noticia “Detectan alza de 300% en ventas de artículos electrónicos en medio de la pandemia”

b. Testimonial

1. Paulina Villouta Torres, cédula de identidad N°15.434.299-0. Señala que es dirigente sindical y viaja 2 veces al año a regiones, donde conoció a la demandante. Señala que fue despedida en agosto del 2020 por necesidades de la empresa, que se habría argumentado el estallido social y después el COVID para despedirla. Sostiene que



Temuco fue una de las tiendas que no cerró, dice que la mayoría de las que cerró fue en Santiago, atendiendo todo el año la tienda de Temuco. En cuanto al nivel de ventas, señala que la venta online habría subido un 300% y que la venta presencial habría bajado un 40%. En cuanto a las modalidades de venta, señala que en fase 2 del plan paso a paso hay posibilidad de retiro en tienda. Contrainterrogada, señala que trabaja en la empresa como analista de crédito, pero que se ha dedicado a tiempo completo a labores sindicales. Consultada acerca de los sondeos que señala como fuente de información, afirma que revisan la bolsa, páginas de internet y otras fuentes, y que cuando hay negociación colectiva tienen acceso a información oficial. Señala que la última negociación colectiva fue en 2019, pero que desde entonces sacan la información del diario financiero, donde argumenta la existencia del dato de aumento en 300% de las ventas en línea.

2. Ingrid Toloza Soto, cédula de identidad N°12.959.337-7. Señala que conoce a la demandante por ser miembro del sindicato, desde que se inscribió hace dos años. Señala conocer que la desvincularon sin saber certeramente la fecha, pero en conocimiento de la causal invocada. Sostiene que la empresa pone como excusa el estallido social y la cuarentena por el COVID para fundar la causal. En cuanto a lo anterior señala que por el estallido social solo fueron 1 o 2 las tiendas complicadas, y respecto al COVID, se siguió vendiendo por internet. Consultada acerca de las funciones de la demandante, señala que prestaba servicios como vendedora en la tienda de Temuco. Señala ser secretaria del sindicato desde 2010. No fue contrainterrogada.

Quinto: Que, la causal de despido establecida en el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, dice relación con necesidades de la empresa, establecimiento, o servicio, las que deben ser ajenas a la voluntad del empleador. Asimismo, el fundamento de



esta causal debe ser realizado en términos objetivos, explicando cómo afecta específicamente al trabajador y no de modo genérico poniendo como motivos los propios ejemplos de necesidades de la empresa que establece la ley. Así lo ha dicho la Corte de Apelaciones de Santiago:

“ Como se observa entonces, la conclusión del tribunal, es lógica y ajustada al hecho que la invocación de esta causal, al caso concreto de un trabajador, no puede quedar a la mera voluntad o capricho del empleador, pues no se trata de hacer una invocación genérica en cuanto a elementos que como ejemplo indica el artículo 161 del Código del Trabajo, sino que debe indicar concretamente los hechos en que se funda el despido del trabajador en particular, cuestión que corresponde al juez calificar en cada caso en particular” (Corte de Apelaciones de Santiago, rol N°3.250-2018, 23 de abril de 2019, considerando décimo, destacado propio).

Asimismo, los elementos o situaciones de hecho en que se funda la causal de necesidades de la empresa deben ser probadas por quien al alega;

“sea que se trate de situaciones que fuercen procesos de modernización o racionalización (...); o bien sean derivados de acontecimientos económicos, como bajas de productividad o cambios en las condiciones de mercado, deben todos ellos ser probados en virtud de la carga procesal que la invocación del motivo de exoneración conlleva” (Academia Judicial de Chile (2018). Manual de juicio del trabajo. Impresión en talleres propios, Santiago, Chile, p. 171).

También se ha establecido por la doctrina y la jurisprudencia que existen tres requisitos para la configuración de esta causal de despido; uno técnico, uno objetivo y uno de necesidad del despido. En cuanto al primer requisito, este se refiere a aspectos técnicos o económicos que afecten a la empresa, y debe tratarse de circunstancias graves o irremediables para el empleador. El requisito o exigencia objetivo por su parte, dice relación con que la causa se ajena a la voluntad del empleador, y que los hechos o circunstancias alegados hagan procedente la causal. Por su parte el último requisito relativo a elementos que den cuenta del necesario despido del trabajador. Irene Rojas (2020) sostiene respecto a este punto que se da el debate relativo a la definición de los trabajadores concretos que se verán afectados, ya que esta definición debe ser la consecuencia necesaria



e indispensable del supuesto que configura la causa de necesidades de la empresa, “cuestionándose de esta manera la falta de criterios objetivos en la determinación de los trabajadores que son despedidos” (Rojas, Irene (2020). Las necesidades de la empresa como causa de terminación del contrato de trabajo en el sistema jurídico chileno. En Revista de derecho de Coquimbo (en línea), p. 14. Disponible en <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rducn/v27/0718-9753-rducn-27-13.pdf>).

Finalmente, en cuanto a la oportunidad en que la causal de necesidades de la empresa debe ser comunicada al trabajador, esto debe ocurrir con ocasión de la carta de aviso de despido que se señala en el art. 162 inciso 4° del Código del Trabajo, estableciéndose como correlato de dicha obligación la sanción prescrita por el artículo 454 N°1, esto es no poder alegar en juicio hechos distintos a los señalados en la carta como justificativos del despido. La aplicabilidad de esta sanción a la falta de contenido específico a la carta de despido ha sido ampliamente aceptada por la doctrina y jurisprudencia, tal como señala Irene Rojas:

“la doctrina jurisprudencial actual es clara en la concurrencia de dicha exigencia para la definición de la causa aplicada. Así concluye la Corte Suprema en cuanto debe indicarse en la misiva “...tanto la causal legal como los hechos en que se funda, los que deben ser específicos y no genéricos...” (Rojas, Irene (2020). Las necesidades de la empresa como causa de terminación del contrato de trabajo en el sistema jurídico chileno. En Revista de derecho de Coquimbo (en línea), p. 14. Disponible en <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rducn/v27/0718-9753-rducn-27-13.pdf>).

De esta forma, el contenido de la carta de aviso de despido establece un marco de los hechos a probar como fundamento de la causal invocada para el despido en el juicio, al tenor de los hechos controvertidos fijados por el tribunal, que en el caso de autos fueron establecidos como la “procedencia del despido por la causal invocada, hechos y circunstancias que lo configuran”. De tal forma, en el caso sub-lite solo se podrán admitir a prueba hechos que ya hubieren sido alegados por la demandada al momento de suscribir la carta de aviso de despido.

Sexto: Que, conforme a los razonado, de la carta de despido se desprenden los siguientes hechos alegados por la demandada para fundar la causal de despido invocada: (i)



compleja situación económica de la demandada y sus empresas asociadas, como consecuencia del denominado “estallido social” y la pandemia por Coronavirus; (ii) impacto en los negocios de la empresa; (iii) Resultados negativos de la empresa; (iv) cierre de tiendas al público por decisión de la autoridad (v) supresión del puesto de trabajo de la demandante.

En cuanto al primer punto relativo a la situación económica de la demandada, esta ha acompañado extensa prueba relativa a como le ha afectado a la empresa, y al grupo económico del que forma parte tanto la crisis social iniciada en octubre de 2019, como la pandemia durante el año 2020, consisten en los documentos signados con los números 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la prueba documental ofrecida por la demandada, individualizada en el considerando cuarto. Dichos documentos efectivamente dan cuenta, en primer lugar, de que ciertas tiendas de la demandada sufrieron daños o saqueos. Asimismo, da cuenta de disminuciones en los ingresos de la empresa, así como de desistimiento de contratos y modificaciones en la calificación de riesgo de la entidad, que dan cuenta de que la situación financiera de la compañía se encontraría en un estado peor que en periodos anteriores. Lo anterior también es refrendado por los tres testigos ofrecidos por la demandada, que indican la existencia de problemas económicos en la compañía. Lo anterior también da cuenta del impacto que han tenido estos hechos en los negocios de la empresa, y en particular en el negocio presencial.

Los resultados negativos de la empresa también han sido probados mediante la información contable antes señalada. El cierre de tiendas por actos de autoridad ha sido establecido mediante la prueba testimonial, ya que todos los testigos han señalado la necesidad del cierre de sucursales en distintos periodos. Si bien difieren en la cantidad de tiendas que se han visto afectadas y los periodos en que ellas han cerrado, todos han reconocido que la tienda de Temuco ha permanecido cerrada al menos por la cuarentena del mes de abril del año 2020. Sin perjuicio de lo anterior, la gravedad de ellos problemas económicos no es fácilmente apreciable con los documentos acompañados, ya que el tribunal no tiene un parámetro de cuál debe ser la calificación de riesgo de una empresa viable, ni cómo deben ser los estados financieros de una empresa para considerar que se encuentra ante una grave crisis financiera, ni que tan relevante es que la demandada pague



más o menos dinero mensualmente a propósito de la declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado. Estos antecedentes y parámetros que permitieran calificar de grave la situación económica de la demandada debieron ser alegados y/o sugeridos por la propia demandada, explicando su calificación de gravedad, y no limitándose a ofrecer una gran cantidad de prueba documental que por sí sola, solo prueba una cosa: que los resultados del último periodo de la empresa son peores que los de periodos anteriores, lo que se refleja en la baja en los libros de ventas y estados financieros, y se explica por el cierre de tiendas y gastos adicionales.

Luego, en cuanto a la supresión del puesto de trabajo de la demandante, que se señala en la carta de despido, la demandada ha acompañado extensa documentación relativa a la relación laboral y a su término, así como al término de la relación laboral de otros trabajadores, consistente en las pruebas consignadas bajo los números 1, 2, 3, 4, 6, 11, 16, 17, 18, 36, 37, 38 y 39 de la prueba documental ofrecida por la demandada, individualizada en el considerando cuarto. Estos antecedentes logran dar por establecido el hecho de que la trabajadora fue despedida invocando el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, cumpliendo con las formalidades de entrega de la carta de despido, y que dicha situación también ocurrió con un considerable número de ex trabajadores de la empresa, que igualmente fueron despedidos en virtud de la causal señalada. Sin embargo, dichos documentos no prueban la supresión del puesto de trabajo de la demandante, ni cómo se relacionan los problemas financieros de la compañía de forma específica con el puesto de trabajo de la actora.

Al efecto, tal y como se señaló en el considerando precedente, la carta de despido debe establecer de forma explícita como afectan los hechos y circunstancias que se alegan como fundantes de la causal al puesto del o la trabajadora afectada, y por qué su desafectación es necesaria. Dichos requisitos no se satisfacen alegando de forma genérica problemas económicos o despidos masivos. A mayor abundamiento, en la propia carta de despido el empleador sostiene haber tomado la decisión de despedir personal en el área que se desempeña la trabajadora, sin explicar por qué razón es su puesto de trabajo el seleccionado para ser suprimido o para efectuar la reducción de personal y no otro. Corolario de lo anterior es que ni siquiera se menciona en la carta de despido el puesto o



función que ocupaba la trabajadora a la fecha de despido, por lo que malamente la carta podría explicar cómo se funda la causal invocada. De hecho, es la misma empleadora quien acompaña un gran número de cartas de despido idénticas, lo que da cuenta que dichas comunicaciones son genéricas y no cumplen por tanto los requisitos de comunicación necesarios para considerar la causal como debidamente fundada.

En cuanto a la restante prueba, El tribunal advierte que la demandada acompañó un exceso de prueba que en algunos casos es derechamente inútil, y que solo ha dificultado la labor del juez. Así por ejemplo, las pruebas signadas con los números 12 y 15 corresponden a presentaciones del programa *Microsoft Power Point* y hojas de cálculo del programa *Microsoft Excel* elaboradas por la propia demandada, que lógicamente apoyan su tesis de haberse efectuado gastos adicionales en los periodos señalados, pero que no están acompañadas de ningún sustento fáctico, por lo que no se les puede otorgar un valor más allá del que se le podría dar a las declaraciones emanadas de una de las partes en juicio.

Por su parte, la prueba señalada con el número 19 solo es una declaración de la propia demandada de que se realizó una sesión de directorio. El tribunal no llega a entender como dicha prueba podría aportar en algo al fallo de la presente causa.

Por último, las pruebas con los números 32, 33, 34 y 35 son anteriores al primer evento señalado como causante de los problemas económicos de la empresa, esto es la crisis social del 18 de octubre de 2019. Debido a lo anterior, no podrían probar los problemas financieros de la empresa en los periodos alegados.

Séptimo: Que, adicionalmente, los tres testigos de la parte demandada hicieron referencia en sus relatos, los que se encuentran consignados resumidamente en el considerando cuarto, a un plan de reestructuración, el que solo pudieron describir como un plan consistente en bajar la dotación de personal y reducir costos, sin siquiera poder asegurar al tribunal que dicho plan existe de forma escrita, lo que tampoco fue alegado por la demandada en su contestación. Asimismo, la existencia de dicho plan de reestructuración no es mencionado en la carta de aviso de despido, no pudiendo ser incorporado como hecho que justifique la causal según lo prescrito en el art. 454 N° 1. En virtud de lo anterior, no puede darse por probado la existencia de dicho plan de reestructuración, ni mucho menos de su contenido específico.



Octavo: Que, por su parte, la demandante ha acompañado prueba que acredita el despido por la causal invocada, el contenido de la carta de aviso de despido, y los conceptos pagados y descontados al momento de firmar el finiquito, donde se da cuenta de la indemnización por años de servicio pagada, y los descuentos efectuados, además de la respectiva reserva de derechos. Que mediante su prueba testimonial solo ha reforzado lo relativo a la causal de despido invocada, cuestión que ni siquiera es debatido en el procedimiento.

En cuanto a los sondeos y estudios señalados por las testigos, estos carecen de apoyo documental y de fuentes claramente reconocibles, por lo que no es posible por parte del tribunal otorgar valor a las cifras señaladas por las testigos relativas a la recuperación de la empresa y aumentos de un 300% de la venta de internet. Lo anterior sin perjuicio del reconocimiento del aumento de la venta online que ha hecho la demandada, mediante sus propios testigos, en proporciones distintas a las alegadas por las testigos de la demandante.

Finalmente, en cuanto al resto de la prueba documental de la demandante, esta no permite acreditar fehacientemente que el empleador se encuentra en búsqueda de un reemplazo para el mismo puesto que utilizaba la demandante. Sin perjuicio de lo anterior, si da cuenta de la existencia de ofertas de trabajo de la demandada, lo que no se condice con los testimonios de sus testigos, que sostuvieron la existencia de un plan de restructuración que pretendía bajar la dotación de personal, la mantención de la dotación actual y graves problemas económicos que impedirían la contratación de personal. Esto último fue alegado por la demandada como fundamento de la causal de despido invocada, lo que lleva a concluir al sentenciador con mayor asidero la improcedencia del despido por dicha causal.

Noveno: Que, en virtud de lo razonado, y considerando lo establecido por el artículo 168 del Código del Trabajo, este sentenciador considera improcedente el despido por la causal del art. 161 inciso primero del Código del Trabajo, toda vez que la carta de despido no cumple con los requisitos de especificidad, que no se refieren a una exposición pormenorizada y excesivamente detallada, sino que a un relato que dé cuenta de la necesidad del despido del trabajador al que se le está aplicando el despido por dicha causal, y no como los hechos afectan a la empresa en general, pues ello implica la procedencia del despido respecto a toda la compañía. En el caso de autos la carta de



despido es totalmente genérica en cuanto a los hechos alegados, no permitiendo establecerse una conexión coherente y lógica entre dicha situación y el despido específico de la trabajadora demandante. Lo anterior en virtud de que la carta no menciona su puesto de trabajo, ni la sucursal donde se desempeñaba, ni como afectaron los hechos alegados a la sucursal o sede donde desempeñaba sus funciones, ni por qué se decidió suprimir su puesto de trabajo y no otros, ni como todo ello se relaciona con la baja de las ventas producto de la crisis social y la pandemia, como se alega en la carta. Tampoco existe la referencia a un plan de reestructuración escrito, como se alegó en juicio.

Décimo: Que, en cuanto a las prestaciones alegadas, la demandante solicita el recargo del 30% conforme al artículo 168 del Código del trabajo, y la devolución del descuento por “aporte patronal” al seguro de cesantía, conforme al art. 52 en relación con el art. 13 de la ley 19.728.

Respecto del primer punto, el artículo 168 número 1) del Código del trabajo establece la sanción del recargo del 30% a la indemnización por años de servicio en caso de que le juez declare improcedente el despido, habiendo sido invocada la causal del art. 161 inciso primero, por lo que, declarándose el despido improcedente, se accederá en consecuencia a dicho recargo, teniendo una base de cálculo para dicha prestación la reconocida por las partes en el finiquito acompañado por la demandante, y no objetado en cuanto a su contenido por la contraria. En virtud de lo anterior, la indemnización por años de servicio que se pagó a la trabajadora ascendió a la suma de \$5.114.519 (cinco millones ciento catorce mil quinientos diecinueve pesos), procediendo por tanto un recargo del 30% equivalente a \$1.534.356 (Un millón quinientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y seis pesos). Sin perjuicio de lo anterior, advirtiendo el tribunal que la suma pedida por el demandante es menor, y a fin de no incurrir en el vicio de ultrapetita, se estará a la suma solicitada por el demandante, por un total de \$1.404.655. (un millón cuatrocientos cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco pesos).

En cuanto a la segunda prestación reclamada, esto es la devolución del descuento del aporte del empleador al seguro de cesantía, esto encuentra su sustento en el art. 52 en relación con el art. 13 de la ley N°19.728, y ha sido confirmado por la Corte Suprema, mediante recurso de unificación de jurisprudencia:



“Que tanto la indemnización por años de servicio como la imputación de la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía constituyen un efecto que emana de la exoneración prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo.

En consecuencia, si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por la judicatura laboral, simplemente no se satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N° 19.728” (Corte Suprema, rol N°16.086-2019, 8 de junio de 20202, considerando octavo).

Conforme a lo anterior, habiéndose declarado la improcedencia del despido por la causal del art. 161 inciso primero, una consecuencia necesaria de ello es el reintegro al trabajador del descuento efectuado, ya que el sustento para efectuar el descuento del art. 13 de la ley N°19.728 deja de existir. Al considerarse en autos improcedente el despido, consecuencialmente corresponde la devolución del monto, que fue fijado como un hecho pacífico de la causa, en la suma de \$832.216. (Ochocientos treinta y dos mil doscientos dieciséis pesos).

Decimoprimer: Que, la ley 21.226 ha dispensado de la obligación de realizar el trámite administrativo previo a la interposición de la demanda, debido a la actual contingencia sanitaria, por lo que este no es exigible para la procedencia del procedimiento monitorio

Decimosegundo: Que, conforme al artículo 173 del Código del trabajo, y habiendo sido solicitado por la demandante corresponde la aplicación de reajuste conforme al IPC, e intereses en los términos expresados en la norma señalada.

Decimotercero: Que, habiendo sido totalmente vencida, se condenará en costas a la demandada, conforme al art. 144 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por expresa mención del artículo 432 del Código del Trabajo.

Por tanto, en virtud de lo expuesto, y de lo señalado en los artículos 63, 161, 162, 168, 172, 173, 454 N°1, 456, 458, 459, 500, 501 del Código del Trabajo, 144 del Código de Procedimiento Civil, 13 de la ley N°19.728 y demás normas legales aplicables, **se declara:**



- I- Que se **acoge** la demanda presentada por doña **DANIELA ALEJANDRA RAMOS VALENZUELA**, y en consecuencia se declara que el despido sufrido por la demandante fue **improcedente**
- II- Que, en virtud de lo anterior, se condena al pago de las siguientes sumas que la demandada **COMERCIALIZADORA S.A.** deberá pagar a la demandante **DANIELA ALEJANDRA RAMOS VALENZUELA**, por los conceptos que se indican:
- a. Recargo del 30% de la indemnización por años de servicio, conforme al artículo 168 del Código del Trabajo por \$1.404.655. (un millón cuatrocientos cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco pesos).
 - b. Devolución de la suma descontada por aporte del empleador a la AFC, por \$832.216. (ochocientos treinta y dos mil doscientos dieciséis pesos).
- III- Que las sumas anteriores deberán pagarse con los intereses y reajustes establecidos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo
- IV-Que se condena en costas a la demandada, por haber sido totalmente vencida, regulándose estas en la suma de \$300.000. (trescientos mil pesos).
- V- Ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia cúmplase con lo dispuesto en ella, dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

Regístrese y archívese en su oportunidad

RIT: M-3272-2020

RUC: 20-4-0302885-2

Resolvió don **GUILLERMO RODRÍGUEZ ÓRDENES**, Juez suplente del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.



En Santiago, a nueve de febrero del año dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la presente sentencia.



A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>